

RESPUESTA Observación a la invitación 2021-70-70001062020 – SUCRE presentada por Alicia Leonor Pinilla Bruges, Representante legal de la Fundación Casa de la Mujer a través de correo electrónico alicia-pinilla@hotmail.com el día 10-02-2021 a las 12:48 horas.

Reciban un cordial saludo,

En atención a la observación allegada a través del correo Betto Responde <Bettoresponde@icbf.gov.co>, nos permitimos dar respuesta de la siguiente manera:

Señores **FUNDACION CASA DE LA MUJER.**

De acuerdo con su observación, es importante dejar de presente que la misma se entiende como extemporánea toda vez que fue recibida después de las 11:59 p.m. del 29 de enero de 2021. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 320 de 2021 la cual dispone: *“Surtido el trámite descrito en el párrafo anterior, se procederá a efectuar la publicación del informe de evaluación inicial, frente al cual **los interesados podrán realizar observaciones al mismo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su publicación a través del correo electrónico bettoresponde@icbf.gov.co, respecto de las cuales la entidad dará respuesta y publicará un nuevo informe de evaluación si a ello hubiere lugar**”*. No obstante, con el fin atender su solicitud la Entidad procede a dar respuesta de fondo a las misma en el siguiente sentido:

1. BETTO, (Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad)

Con el ánimo de garantizar la transparencia en la contratación de estos servicios, la selección objetiva y contar con los operadores idóneos, el ICBF implementó la herramienta tecnológica de inteligencia artificial, denominada BETTO, (Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad), que fue diseñada para facilitar los procesos de invitación, evaluación y selección de los operadores habilitados en el Banco Nacional de Oferentes para los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a cargo de la Dirección de Primera Infancia. Esta herramienta es una solución tecnológica, de analítica avanzada y características de algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que permiten realizar acciones basados en una serie de factores determinados por el ICBF, que para este caso son los criterios de verificación, selección y desempate en caso de requerirse.

Derivado de este proceso de evaluación el día 18 de enero de la presente vigencia se procedió a realizar una publicación de resultados iniciales del proceso de selección, sin embargo, desde el día 28 de enero de 2021 se han venido publicando los resultados de las evaluaciones que se encuentran en el siguiente link:

<https://www.icbf.gov.co/proceso-de-seleccion-servicios-integrales-de-primera-infancia-2021>.

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

A su vez, de acuerdo con la Resolución No. 320 de 2021, una vez publicado el informe de evaluación inicial, los interesados podrán realizar observaciones al mismo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su publicación a través del correo electrónico bettoresponde@icbf.gov.co, respecto de las cuales la entidad dará respuesta y publicará un nuevo informe de evaluación si a ello hubiere lugar.

Razon por la cual, el ICBF procederá a responder de fondo las observaciones que se presenten y a informar al observante de las razones que sustentan el resultado de la evaluación.

Los resultados de los procesos que se adelantan en la actualidad a través de la herramienta tecnológica BETTO, tienen como finalidad evaluar las manifestaciones de interés presentadas por los oferentes habilitados dentro del BNOPI y de esta manera arrojar un orden de elegibilidad de la selección de los operadores. Una vez seleccionados los oferentes las Direcciones Regionales deben realizar la verificación de dicha información y adelantar el trámite contractual conforme al manual de contratación vigente. Es necesario precisar que el procedimiento de selección de entidades a través del Banco de Oferentes - IP 003 de 2019, así como los criterios de verificación, selección y desempate, en caso de requerirse, fueron reglados a través de actos administrativos de carácter general (Resolución No.5743 de 2020, modificada por las resoluciones Nros. 6028, 6694 de 2020, 320, 371 de 2021).

En los actos administrativos mencionados anteriormente, se estableció el procedimiento administrativo de selección que se está adelantando en la actualidad, es por ello, que la evaluación o los resultados de la evaluación inicial que se encuentran en la plataforma BETTO, constituye un acto de trámite frente al cual, no procede ningún tipo de recurso.

En este sentido es pertinente aclarar que tal como lo ha explicado la Corte Constitucional en reiteradas sentencias, los actos de trámite, que comprenden los preparatorios, de ejecución y, en general, todos los actos de impulso procesal, son los que no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta sino que están encaminados a contribuir con su realización. Con respecto a dichos actos, esta Corporación ha establecido que “(...) no expresan en conjunto la voluntad de la administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas¹, razón por la cual, en el caso que nos ocupa es evidente que el informe de evaluación es un acto de mero trámite contra el cual no proceden recursos y por tal motivo se responderá sus inconformidades, como derecho de petición.

En todo caso, es importante señalar que una vez sean publicados los respectivos órdenes de elegibilidad, en la herramienta tecnológica BETTO, estas puedan ser controvertidas por los interesados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su publicación a través del correo electrónico bettoresponde@icbf.gov.co.

¹ Corte Constitucional. Sentencia SU077/18. Referencia: Expediente T-6.326.444 Magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado.

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SELECCIÓN DE LOS OPERADORES HABILITADOS EN EL BNOPI

El Instituto estableció un procedimiento administrativo de selección de los operadores que prestarán los servicios a cargo de la Dirección de Primera Infancia, en el cual se determinaron unos criterios de verificación y selección, así como de desempate, la modalidad de selección aplicable corresponde a la contratación directa conforme la normatividad que regula el tema.

Por tanto, al no corresponder a procesos de selección reglados en el Estatuto General de Contratación Estatal y que los términos para presentación de manifestaciones de interés, verificación de criterios y posterior suscripción de los contratos de aporte, no se ciñen a términos legales, sino a las necesidades propias del Instituto, se dio aplicación a los dispuesto por la Resolución No.5743 de 2020, modificada por las Resoluciones Nros. 6028, 6694 de 2020, 320, 371 de 2021, establece en el literal e), del artículo 1, lo siguiente:

“(…)

e) Recibidas las manifestaciones de interés y la documentación que soporte las mismas se procederá a efectuar la validación de los criterios de verificación, selección y los de desempate, en el evento que se requieran. Este procedimiento se agotará de acuerdo a cada circunscripción (municipal, departamental y nacional sucesivamente) y se deberá tener en cuenta a las entidades que se encuentren en el mismo rango de capacidad operativa del contrato a suscribirse, es decir, se agotará el respectivo rango en cada una de las circunscripciones antes descritas. Para la selección de los proponentes que presenten manifestación de interés para la suscripción de contratos cuyo valor corresponda a rango 4, se deberá tener en cuenta a las entidades que se encuentren en rango 4 y 5.

Si una vez agotado el rango no se logra la selección de la entidad, se procederá a efectuar revisión de las entidades habilitadas en el siguiente rango y sucesivamente en los posteriores.

Si al realizar el agotamiento por circunscripción y rango, se presenta el caso en el que solo hay un proponente para la respectiva circunscripción o rango que se esté agotando, se debe verificar que este cumpla con los criterios de verificación y que obtenga un puntaje mínimo de 30 puntos en los criterios de selección, de lo contrario, se deben evaluar los proponentes del rango o circunscripción posterior. Si aun así ningún oferente obtiene mínimo 30 puntos en los criterios de selección, se deben evaluar también los proponentes del siguiente rango o circunscripción según sea el caso. El resultado se verá reflejado en el consolidado de informe de evaluación respectivo seleccionando la entidad ubicada en el primer orden de elegibilidad.

Una vez agotada la evaluación a los criterios de verificación, si se encuentran requisitos de la manifestación de interés que no afecten la asignación de puntaje, se solicitarán y podrán ser entregados por los proponentes en un término máximo de dos (2) días hábiles. En caso de no recibir los documentos requeridos para la subsanación en el término establecido, será rechazada la manifestación de interés.

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

Surtido el trámite descrito en el párrafo anterior, se procederá a efectuar la publicación del informe de evaluación inicial, frente al cual los interesados podrán realizar observaciones al mismo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su publicación a través del correo electrónico bettoresponde@icbf.gov.co, respecto de las cuales la entidad dará respuesta y publicará un nuevo informe de evaluación si a ello hubiere lugar. (...)

En el marco del literal anteriormente señalado, el proceso de evaluación se desarrolló, en primera medida, teniendo en cuenta la circunscripción de las entidades que manifestaron interés. Para este proceso, la circunscripción se entiende como la experiencia territorial en educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia acreditada donde se prestará el servicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución No. 6694 de 2020, la circunscripción municipal corresponde a los casos donde el oferente certifique experiencia en el municipio (s) donde se prestará el servicio. La circunscripción departamental corresponde a los casos donde el oferente certifique experiencia en al menos dos municipios del departamento donde se prestará el servicio, diferentes al municipio (s) requerido (s). Finalmente, la circunscripción nacional corresponde a los casos donde el oferente certifique experiencia en al menos dos departamentos diferentes a donde se prestará el servicio.

De esta manera, se hace una revisión de la experiencia municipal relacionada en la manifestación de interés y declaración juramentada por cada uno de los oferentes que se presentaron a la invitación. Una vez revisada la circunscripción municipal, se procede a revisar el rango de los oferentes que manifestaron interés. Se procede entonces a agotar la circunscripción territorial municipal con los oferentes cuya capacidad operativa corresponda a la del rango del valor del contrato.

En caso de presentarse un solo proponente para la respectiva circunscripción territorial municipal y del rango que se esté agotando, se debe verificar que este cumpla con los criterios de verificación y que obtenga un puntaje mínimo de 30 puntos en los criterios de selección, de lo contrario, se procederá a efectuar revisión de las entidades habilitadas en el siguiente rango y sucesivamente en los posteriores.

Si agotada la circunscripción territorial municipal, tal como se mencionó anteriormente no se logra la selección, se procede a agotar la circunscripción territorial departamental con los oferentes cuya capacidad operativa corresponda a la del rango del valor del contrato.

En caso de presentarse un solo proponente para la respectiva circunscripción territorial departamental y del rango que se esté agotando, se debe verificar que este cumpla con los criterios de verificación y que obtenga un puntaje mínimo de 30 puntos en los criterios de selección, de lo contrario, se procederá a efectuar revisión de las entidades habilitadas en el siguiente rango y sucesivamente en los posteriores.

Si agotada la circunscripción territorial departamental, tal como se mencionó anteriormente y no se logra la selección, se procede a agotar la circunscripción territorial nacional con los oferentes cuya capacidad operativa corresponda a la del rango del valor del contrato.

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

En caso de presentarse un solo proponente para la respectiva circunscripción territorial nacional y del rango que se esté agotando, se debe verificar que este cumpla con los criterios de verificación y que obtenga un puntaje mínimo de 30 puntos en los criterios de selección, de lo contrario, se procederá a efectuar revisión de las entidades habilitadas en el siguiente rango y sucesivamente en los posteriores.

Derivado de este proceso de evaluación el día 18 de enero de la presente vigencia se procedió a realizar una publicación de resultados iniciales del proceso de selección, sin embargo, desde el día 27 de enero de 2021 se han venido publicando los resultados de las evaluaciones que se encuentran en el siguiente link: <https://www.icbf.gov.co/proceso-de-seleccion-servicios-integrales-de-primera-infancia-2021>.

A su vez, de acuerdo con la Resolución No. 320 de 2021, una vez publicado el informe de evaluación inicial, los interesados podrán realizar observaciones al mismo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su publicación a través del correo electrónico bettoresponde@icbf.gov.co, respecto de las cuales la entidad dará respuesta y publicará un nuevo informe de evaluación si a ello hubiere lugar.

3. SER UNA ENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR NO LE OTORGA A NINGUNA ENTIDAD UN DERECHO ADQUIRIDO

La GUÍA JURÍDICA PARA OTORGAR, RECONOCER, PERSONERÍAS JURÍDICAS A INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR QUE PRESTAN SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL del ICBF, ha señalado claramente respecto de las ESALES que pertenecen al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, lo siguiente:

“(…) 2. Normatividad aplicable

Constitución Política de Colombia

Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.

Ley 7 de 1979

Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones.

Artículo 12. El bienestar Familiar es un servicio público a cargo del Estado y se prestará a través del "Sistema Nacional de Bienestar Familiar" que se establece en esta norma y por los organismos oficiales y particulares legalmente autorizados.

Corresponde al gobierno proyectar, ejecutar y coordinar la política en materia de Bienestar Familiar.

Artículo 21. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá las siguientes funciones:

(…)

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

6. Asistir al Presidente de la República en la inspección y vigilancia de que trata el ordinal 19 del artículo 120 de la Constitución Nacional, sobre las instituciones de utilidad común que tengan como objetivo la protección de la familia y de los menores de edad.;

Ley 1098 de 2006

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

Artículo 16. Deber de vigilancia del estado. Todas las personas naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, que aún, con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, las niñas o los adolescentes son sujetos de la vigilancia del Estado. De acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio público de Bienestar Familiar compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema que prestan servicios de protección a los menores de edad o la familia y a las que desarrollen el programa de adopción.

Quiere decir lo anterior que así como el ICBF es competente para ejercer un control a través del reconocimiento, otorgamiento, suspensión o cancelación de personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema, que presten servicios de protección a los menores de edad o la familia y a las que desarrollen el programa de adopción, lo es también para ejerce un control a los programas que se desarrollen en prevención donde se establezcan mecanismos de control a través de los cuales se construyan estándares de calidad, se verifique la prestación del servicio, se haga seguimiento, recomendaciones y asistencia a los programas con el fin de que estos se desarrollen cumpliendo las normas que regulan el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, sin que necesariamente tengan que contar con licencia de funcionamiento.

Lo anterior se sustenta en el hecho de que la protección integral la cual se refiere igualmente a los asuntos de prevención y protección, parte de la consideración social del niño, niña y adolescente como sujeto de derechos y se desarrolla a través de principios como el interés superior, la corresponsabilidad, la promoción, la prevención y la restitución de derechos, entre otros. (...)

Así las cosas, es importante señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. La personalidad jurídica es a su vez un atributo de los sujetos en virtud del cual se les reconoce como titulares de derechos y de obligaciones, dentro de los cuales se destaca la capacidad jurídica, es decir, la capacidad para adquirir obligaciones de manera autónoma en virtud de actos, contratos o negocios jurídicos. Las personerías jurídicas y las licencias de funcionamiento de competencia del ICBF únicamente se otorgan o reconocen a entidades civiles sin ánimo de lucro, en razón a la naturaleza de los servicios prestados en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o la comunidad en general. Una ESAL no persigue el reparto de utilidades entre sus miembros.

De esta manera, el Otorgamiento de Personería jurídica, es el consentimiento legal que efectúa el ICBF, mediante acto administrativo de la existencia de una persona ficticia, capaz de ejercer

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

derechos y contraer obligaciones civiles en sus relaciones jurídicas dentro del ámbito del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el Reconocimiento de Personería Jurídica, es el acto administrativo mediante el cual el ICBF le reconoce personería jurídica a una institución, cuando esta ha sido otorgada inicialmente por otra autoridad o cuando se ha registrado inicialmente ante la Cámara de Comercio, por fuera del régimen especial de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral.

De lo anterior, se desprende claramente que las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en razón al reconocimiento u otorgamiento de personería jurídica por parte del ICBF, tiene como finalidad que estas presten el servicio de bienestar familiar y hagan parte del régimen especial. Es de aclarar, que el reconocimiento u otorgamiento de personería jurídica no genera derechos a las ESALES respecto de las decisiones que para el efecto tome el ICBF como establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, creado mediante la Ley 75 de 1968 y su decreto reglamentario 2388 de 1979, adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social mediante Decreto 4156 de 2011, que tiene por objeto propender y fortalecer la integración y desarrollo armónico de la familia, proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizarles sus derechos.

Asimismo, es de resaltar y precisar que el ICBF es autónomo de reglar su forma de contratación, y frente a esta facultad, no debe autorizar o concertar ese procedimiento con ningún operador o contratista, toda vez, que el sistema de contratación se encuentra debidamente reglado, y el ICBF es garante de cumplir los principios de selección objetiva, publicidad, transparencia y libre concurrencia. En ese orden de ideas, el Manual de Contratación que se encuentra publicado en la página web del ICBF para consulta de todos los ciudadanos, establece claramente que:

“4. RÉGIMEN ESPECIAL DE APORTE

El contrato de aporte se celebrará bajo la modalidad de contratación directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Decreto Ley 2150 de 1995, el contratista deberá seleccionarse del Banco Nacional de Oferentes conformado para el efecto por el ICBF o de forma directa de conformidad con lo dispuesto en este numeral.

En virtud de los principios de planeación, economía, transparencia, eficiencia, igualdad, responsabilidad y en general en cumplimiento a los principios que rigen la contratación pública y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa y en cumplimiento de la política de austeridad del gasto, las áreas que requieran suscribir un contrato de aporte deberán tener en cuenta las disposiciones contempladas en los documentos y procedimientos que se expidan para la prestación del servicio.

(...)

4.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los Bancos Nacionales de Oferentes del ICBF, se conformarán para la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar y estarán constituidos por un listado de operadores habilitados para cada una de las modalidades, los cuales deberán ser exclusivamente personas jurídicas sin ánimo de lucro, que cuenten con la personería jurídica otorgada por el ICBF vigente o reconocimiento para pertenecer al SNBF por quien corresponda de conformidad con las excepciones aplicables al caso y con la licencia de funcionamiento el evento de requerirse según la modalidad.

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

La habilitación de operadores para hacer parte de los Bancos de Oferentes no genera obligación para el ICBF de suscribir contrato alguno, ni otorga derecho alguno a los habilitados” (Resaltado fuera del texto original)

En ese orden de ideas, en relación con la mera expectativa de los operadores habilitados, en la esfera de los actos propios del ICBF a la luz de la confianza legítima, es de anotar que a diferencia de otras relaciones jurídicas en donde se predica tal prerrogativa, para la presente no es posible generarla ya que como se dejó claro desde el inicio del proceso de la conformación del Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia, en el inciso final del numeral 3º del capítulo 1º de la IP 003 de 2019, se previó que “*La habilitación de interesados para hacer parte del Banco Nacional de Oferentes no genera obligación para el ICBF de suscribir contrato alguno, lo que implica desde el inicio de la relación entre el ICBF y los operadores que se habiliten, que no se generen derechos o expectativas contractuales a favor de estos últimos, por la mera habilitación*”. Esta condición fue aceptada libremente por los operadores, incluyendo las entidades tutelantes, que decidieron presentarse a la IP 003 de 2019, y que quedaron “habilitados”.

4. EVALUACIÓN INICIAL BETTO – ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE

La norma hace una distinción entre actos administrativos definitivos y los actos de trámite. Los primeros son aquellos que concluyen la actuación administrativa, en tanto que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos, mientras que los de trámite contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo. La calificación de un acto administrativo como acto definitivo o de trámite es fundamental para determinar si es susceptible de recursos por la vía gubernativa y asimismo de control jurisdiccional contencioso administrativo.

Así las cosas, tal como se mencionó en el numeral 2 del presente documento, los resultados de los procesos que se adelantan en la actualidad a través de la herramienta tecnológica BETTO, tienen como finalidad evaluar las manifestaciones de interés presentadas por los oferentes habilitados dentro del BNOPI y de esta manera arrojar un orden de elegibilidad de la selección de los oferentes. Una vez seleccionados las Direcciones Regionales realizan una verificación de dicha información y adelantan el trámite contractual conforme al manual de contratación vigente.

Es importante precisar que el procedimiento de selección de entidades a través del Banco de Oferentes - IP 003 de 2019, así como los criterios de verificación, selección y desempate, en caso de requerirse, fueron reglados a través de actos administrativos de carácter general (Resolución 5743 de 2020, modificada por las resoluciones 6028, 6694 de 2020, 320, 371 de 2021).

Posteriormente a la respuesta de las observaciones, y a la confirmación de los resultados de BETTO, las Direcciones Regionales cumplirán con las actividades previstas en el Manual de Contratación y las orientaciones dadas en el memorando con radicado 202012400000183983

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

del 24/12/2020, y el literal j del artículo primero de la Resolución 5743 de 2020, modificado por las Resoluciones 6028 y 6694 de 2020, que reza:

“Una vez realizada la validación de los criterios de verificación y selección por parte de la herramienta BETTO, establecido el orden de elegibilidad para cada contrato y verificados los topes de cupos establecidos en el numeral anterior, los Directores Regionales deberán solicitar al interesado ubicado en el primer orden de elegibilidad o subsiguientes en caso de ser necesario el agotamiento de dicho orden de elegibilidad, allegar la documentación que soporte el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución No. 5743 de 2020 y sus modificaciones, la cual debe ser entregada por el interesado en un término máximo de un (1) día hábil contado a partir del envío de la solicitud por parte del ICBF.

Presentada la documentación el Director Regional efectuará la verificación correspondiente en el marco del comité de contratación de la Regional en un término máximo de un (1) día hábil, con el fin de garantizar que las entidades con las cuales se tiene previsto la suscripción del contrato, sean las más idóneas para la prestación del servicio.

A su vez, deberán revisar que el interesado ubicado en primer orden de elegibilidad o subsiguientes en caso de ser necesario el agotamiento de dicho orden de elegibilidad, tenga vigente la personería jurídica, esto es, que no haya sido cancelada, ni suspendida y en este último evento verificar que a la fecha se hayan superado las circunstancias que dieron origen a la suspensión. De igual forma, constatar que no haya sido objeto de declaratorias de caducidad, así como verificar la no existencia de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, de medidas correctivas, delitos sexuales, que le exige la ley a quienes suscriben contratos con el Estado y demás documentos que se consideren pertinentes para realizar la respectiva verificación por parte de la Director Regional.

En el evento en que el interesado ubicado en primer orden de elegibilidad no presente la documentación en el término descrito anteriormente, o presente documentación incompleta, o manifieste su desistimiento en suscribir el contrato, deberá ser rechazado y se continuará con la verificación de la entidad ubicada en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente.” (...) (Resaltado fuera del texto original)

De conformidad con lo expuesto, el ICBF ha garantizado el principio de publicidad y transparencia en todo el proceso de contratación de los servicios de primera infancia, y a través de la plataforma tecnológica BETTO todos los ciudadanos pueden ser veedores del cumplimiento de los criterios de selección establecidos dentro del procedimiento administrativo en la Resolución 5743 de 2020 y sus modificaciones.

5. RESOLUCIÓN No. 371 DE 27 DE ENERO DE 2021

Es preciso resaltar que el artículo primero de la Resolución No. 371 de 27 de enero de 2021 indica:

“Modificar parcialmente el numeral 1.3 INFRAESTRUCTURA del artículo segundo de la Resolución 5743 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

(...) 1.3 INFRAESTRUCTURA. El operador debe cumplir con unos parámetros mínimos en la infraestructura para asegurar la correcta prestación del servicio. Para eso se verificará que disponga del área adecuada en los espacios (en metros cuadrados) necesarios para dar una atención de calidad a los niños y niñas. Se pretende determinar como factor de verificación sobre aquellos que dispongan una infraestructura propia, o a título de comodato o de arrendamiento y la pongan a disposición de la prestación del servicio, en los eventos en que aplique. Este criterio se verificará mediante una declaración juramentada suscrita por el representante legal, en la cual manifiesta que la infraestructura que se pondrá a disposición para la prestación del servicio cumple con las especificaciones del Manual Operativo correspondiente.

Previo a la suscripción del contrato, en el marco del proceso establecido en el literal j) del artículo primero de la presente resolución, el interesado ubicado en primer orden de elegibilidad o subsiguientes en caso de ser necesario, deberá acreditar la **inmediata** disposición de la infraestructura para la prestación del servicio público de bienestar familiar, mediante los documentos idóneos que así lo demuestren.

A su vez, previo a la suscripción del contrato se deberá certificar por parte del Director Regional o Coordinador del centro Zonal, como mínimo para los servicios de centro de desarrollo infantil CDI y Hogares Infantiles HI, las condiciones de calidad en la infraestructura ofertada de acuerdo con las indicaciones del manual operativo correspondiente. Para los casos en los que las infraestructuras presentadas sean en las que se venía prestando el servicio en contratos anteriores, el Director Regional o el Coordinador del Centro Zonal, deberá aportar la certificación sin necesidad de realizar la verificación en sitio.

Para los casos en los que las infraestructuras presentadas sean nuevas, el Director Regional o Coordinador del Centro Zonal, deberá aportar la certificación con la verificación en sitio de las condiciones de calidad de la infraestructura, a través del diligenciamiento de la ficha basada en los parámetros técnicos definidos en los manuales operativos (...). (Negrilla y subrayado fuera del texto)

6. VERIFICACIÓN POR PARTE DE LAS DIRECCIONES REGIONALES

Posteriormente a la respuesta de las observaciones, y a la confirmación de los resultados de BETTO, las Direcciones Regionales cumplirán con las actividades previstas en el Manual de Contratación y las orientaciones dadas en el memorando con radicado 202012400000183983 del 24/12/2020, y el literal j del artículo primero de la Resolución No. 5743 de 2020, modificado por las Resoluciones Nros. 6028 y 6694 de 2020, que reza:

“Una vez realizada la validación de los criterios de verificación y selección por parte de la herramienta BETTO, establecido el orden de elegibilidad para cada contrato y verificados los toques de cupos establecidos en el numeral anterior, los Directores Regionales deberán solicitar al interesado ubicado en el primer orden de elegibilidad o subsiguientes en caso de ser necesario el agotamiento de dicho orden de elegibilidad, **allegar la documentación que soporte el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución No. 5743 de 2020 y sus modificaciones, la cual**

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

debe ser entregada por el interesado en un término máximo de un (1) día hábil contado a partir del envío de la solicitud por parte del ICBF.

Presentada la documentación el Director Regional efectuará la verificación correspondiente en el marco del comité de contratación de la Regional en un término máximo de un (1) día hábil, con el fin de garantizar que las entidades con las cuales se tiene previsto la suscripción del contrato, sean las más idóneas para la prestación del servicio.

A su vez, deberán revisar que el interesado ubicado en primer orden de elegibilidad o subsiguientes en caso de ser necesario el agotamiento de dicho orden de elegibilidad, tenga vigente la personería jurídica, esto es, que no haya sido cancelada, ni suspendida y en este último evento verificar que a la fecha se hayan superado las circunstancias que dieron origen a la suspensión. De igual forma, constatar que no haya sido objeto de declaratorias de caducidad, así como verificar la no existencia de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, de medidas correctivas, delitos sexuales, que le exige la ley a quienes suscriben contratos con el Estado **y demás documentos que se consideren pertinentes para realizar la respectiva verificación por parte de la Director Regional.**

En el evento en que el interesado ubicado en primer orden de elegibilidad no presente la documentación en el término descrito anteriormente, o presente documentación incompleta, o manifieste su desistimiento en suscribir el contrato, deberá ser rechazado y se continuará con la verificación de la entidad ubicada en el segundo orden de elegibilidad y así sucesivamente. (...)”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

7. CON RELACION A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN SU SOLICITUD

Tal como se indicó en el numeral precedente, los términos con que cuenta la Dirección Regional para adelantar y terminar satisfactoriamente la contratación respectiva son perentorios.

En el caso que nos ocupa, es claro que la Dirección Regional se está acogiendo al procedimiento, términos y lineamientos definidos en los actos administrativos pluricitados, habida cuenta que es su deber garantizar que la entidad con la cual se suscriba el contrato, sea la más idónea para la prestación del servicio. Lo anterior, en todo caso, garantizando el agotamiento del orden de elegibilidad.

Adicionalmente, es preciso anotar que los servicios de educación inicial deben cumplir con los estándares de calidad y el componente de ambientes educativos y protectores definidos en los Manuales Operativos respectivos y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 371 de 2021 arriba citada, el *interesado ubicado en primer orden de elegibilidad, **deberá acreditar la inmediata disposición de la infraestructura para la prestación del servicio público de bienestar familiar, mediante los documentos idóneos que así lo demuestren.***

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

La inmediatez requerida, no es capricho de la entidad, sino que obedece a la necesidad apremiante de la suscripción del contrato, habida cuenta de satisfacer la necesidad del servicio.

No obstante, en el caso particular, frente a la infraestructura aportada el interesado manifiesta que no puede garantizar dicha inmediatez, así:

“(...) solo hacen falta trabajos de mantenimiento para la mejora de la infraestructura antes señalada, que pueden ser subsanadas en 7 días ya que no son trabajos estructurales si no de mantenimiento (...)”.


Igualmente, para el caso de la infraestructura adicional presentada, de acuerdo con las verificaciones realizadas en sitio por parte de la Dirección Regional Sucre, se evidenció que la misma no cumplió con las condiciones de calidad de la infraestructura, ni con los parámetros técnicos definidos en los manuales operativos respectivos.

Finalmente, se puntualiza a la **FUNDACIÓN CASA DE LA MUJER** que conforme las reglas establecidas en los actos administrativos antes descritos y las razones esbozadas a lo largo de este documento, no es posible inferir que la suscripción del contrato deba realizarse con el adjudicatario de la invitación, toda vez que antes de ello se hace necesario adelantar una verificación minuciosa por parte de la Dirección Regional.

Por lo anterior, es posible concluir que el procedimiento se efectuó en debida forma dando cumplimiento a los actos administrativos que regulan el tema.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)
LILIANA PULIDO VILLAMIL
Subdirectora General
ICBF

(ORIGINAL FIRMADO)
CLAUDIA ALEJANDRA GELVEZ 
Directora de Primera Infancia
ICBF

(ORIGINAL FIRMADO)
LUZ ADRIANA RIOS GIRALDO
Subdirectora de Operaciones de la Atención
a la Primera Infancia
ICBF

(ORIGINAL FIRMADO)
ALVARO ANDRÉS RUEDA ZAPATA
Director de Información y Tecnología

ICBF

(ORIGINAL FIRMADO)
HELEN ORTIZ CARVAJAL
Directora de Contratación
ICBF

(ORIGINAL FIRMADO)
CAROLINA DEL PILAR TORRES
Contratista Subdirección General
ICBF

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma

(ORIGINAL FIRMADO)
CIELO ALEXANDRA VEGA NAVARRO
Contratista Dirección de Primera Infancia
ICBF

(ORIGINAL FIRMADO)
VIVIANA GARCÍA PINZON
Contratista Dirección de Contratación
ICBF

(ORIGINAL FIRMADO)
LUZ YADIRA VELOSA POVEDA
Contratista de la Dirección de Información y Tecnología
ICBF

Revisó: Luz Adriana Ríos Giraldo - Subdirectora de Operaciones de la Atención a la Primera Infancia
Proyectó: María Fernanda Caballero Solano – Contratista Dirección de Contratación

C.C. Jhony Buelvas – Director Regional ICBF Sucre

Comunicación oficial revisada y aprobada por el remitente de la misma